

Imprimir

La Paz Total fue una de las primeras banderas que adoptó la administración Petro, buscando, bajo este nombre, conseguir una paz que fuera duradera, que cubriera desde diversas aristas el fenómeno, que reconociera que el conflicto implicaba causas estructurales y coyunturales. No obstante, desde el primer momento que se promulgó la política surgieron señalamientos sobre las implicaciones de usar el término "Total", a pesar de la aceptación que generaba el buscar por diversos frentes la paz, ya que era una forma de diferenciarse de los procesos de sus antecesores, pero al tiempo colocaba las expectativas altas sobre los posibles logros que pudiera tener la política.

La Paz Total terminó siendo un término que conglomeraba una bandera amplia y compleja, que recogía a su vez diferentes acciones, pero que terminaría aglomerándose y reconociéndose de manera principal a partir de la desarticulación de los grupos armados existentes. Este proceso se llevaría a cabo de dos formas: la negociación y el sometimiento, teniendo un trato diferencial respecto a cada una de las organizaciones. De igual manera, se posicionarían los ceses al fuego bilaterales, partiendo de que la protección de la sociedad civil para la presente administración es una prioridad.

Sin embargo, a pesar de los impulsos iniciales, a poco más de un año de terminar la gestión el ejecutivo, la Paz Total no ha logrado los resultados esperados, sigue teniendo discusiones sobre su efectividad, no ha articulado un marco jurídico sólido que permita el sometimiento, no se ha conectado con una política de seguridad y ha tenido constantes tropiezos que han ido relegándola del panorama. En este texto se busca comprender el estado actual del proceso de Paz Total desde las problemáticas estructurales y coyunturales que se presentan, partiendo de sus retos y perspectivas.

Una hoja de ruta que no está clara y es cambiante

La política de la Paz Total no termina de consolidarse en parte por su indefinición. No hay una pauta clara de hacia dónde dirigir los diferentes procesos que se producen a nivel territorial, hay indicaciones que presentan matices y no hay una hoja de ruta trazada para llegar a la meta por parte de la administración. La Paz Total se construye a partir del proceso y

evoluciona a medida de las circunstancias; esto le ha dado una amplia flexibilidad que, es buena en la medida que permite una adaptación a los contextos, pero que también ha sido contraproducente en la forma que se ha puesto a constante prueba por parte de las organizaciones armadas.

Asimismo, en medio de la Paz Total no ha habido una definición clara sobre los alcances de la misma, se habla de la implementación del Acuerdo de Paz, de acciones de restablecimiento de derechos, justicia, sometimiento y negociación con los grupos armados, entre otros; lo cual ha implicado que las acciones en pro de esta política no terminen de visualizarse a nivel territorial. No se tiene una bandera acorde con la necesidad del proceso.

Esta carencia de hoja de ruta se entremezcla con la cantidad de acciones que se llevan al tiempo, llegando a tener hasta nueve conversaciones en simultaneo. Esto exige un ejercicio profundo de atención y reconocimiento de las características de cada una de las agrupaciones, ejercicio que es profundamente difícil por los cambios que han sufrido (y siguen presentándose) las organizaciones armadas del país.

Esto también ha implicado que haya una lectura con dificultades sobre los grupos armados, partiendo de la idea errada que algunas agrupaciones, por sus características políticas, iban a querer participar de mejor manera en los procesos que se estaban dando por parte del ejecutivo. De igual modo, la misma rapidez con la que se da la reconfiguración de algunas organizaciones ha llevado a que no se pueda tener un panorama conjunto, las dinámicas delictivas avanzan y permean cada uno de los grupos armados.

Las mesas: Entre la suspensión y el avance

Las circunstancias anteriormente mencionadas son fundamentales para el reconocimiento del estado actual de la Paz Total, debido a que muestran las complicaciones que se tienen en un ámbito general en las conversaciones que se llevan con cada una de las agrupaciones. No existe una metodología clara para los procesos, hay acciones sobre la marcha y los parámetros no son los mismos al momento de entablar una conversación.

El proceso que más tenía la atención por parte del Alto Comisionado de Paz y que representaba, desde la misma óptica del presidente, una posibilidad real para concretarse era el llevado con el ELN. No obstante, en este se han tenido momentos de tensión que llevan a que en la actualidad las conversaciones estén suspendidas. Por un lado, en el caso del gobierno, se afirma que no van a continuar hasta que haya una voluntad real por parte de la organización y abandonen acciones como el secuestro. Por el otro, el ELN considera que no hay un interés real por parte del gobierno y que se han dado mensajes contrarios a la voluntad que deberían presentar, resaltándose las negociaciones con Comuneros del Sur, una disidencia de esta organización, la cual sigue reclamando su integridad.

Este proceso tiene bajas posibilidades de continuar y lograr un resultado efectivo en el periodo que le queda a la actual administración. De hecho, tanto el gobierno como la dirigencia del ELN han señalado que los diálogos no se van a concluir de manera efectiva en el tiempo restante. Estas conversaciones son fundamentales, ya que se considera a esta guerrilla como el último grupo político del país; sin embargo, han surgido afirmaciones del ejecutivo que le han quitado ese carácter y la posiciona más cerca de los grupos criminales.

Otra conversación importante es la que se presenta con el Clan del Golfo, la cual es la organización armada más grande del país (tanto a nivel de presencia territorial, como en el número de efectivos). Con este grupo no se tienen avances significativos que hayan sido mostrados por las partes, más allá de la construcción de confianza y reflejar una fase que es exploratoria. Esto lleva a que tampoco se tenga una perspectiva clara sobre una posible desmovilización.

Asimismo, se tienen procesos con las disidencias de las FARC, las cuales son complejas y afrontan fragmentaciones que se derivan de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central. Con estas organizaciones puede haber posibilidades de llegar a la desmovilización dependiendo de los avances en la negociación o en el sometimiento (teniendo en cuenta que su caracterización aún sigue siendo objeto de debate, al no saber el trato que se les debe dar como organización con ideales políticos o netamente basados en las rentas ilegales); no obstante, esto depende de la voluntad de las partes y de que estas organizaciones logren

deslindarse de los pasados que tienen por sus respectivos orígenes.

Dentro de estos procesos, la Paz Total ha logrado avances significativos (pero no lineales y tampoco exentos de polémicas) en las zonas urbanas, específicamente en los acuerdos logrados en ciudades como Quibdó, Buenaventura y Medellín. En dichos territorios se presentan avances con las organizaciones armadas ilegales, logrando treguas y ceses de actividades que favorecen a las poblaciones de estos territorios. Empero, hay un reto fundamental al no haber una posibilidad jurídica sólida que se pueda ofrecer por parte del Estado para la desmovilización de los combatientes.

Adicionalmente, el gobierno tuvo lecciones aprendidas de los hechos ocurridos en el Catatumbo entre las Disidencias y el ELN, buscando generar cambios en la Paz Total, la cual se está concentrando de forma territorializada, de acuerdo con la voluntad de las organizaciones y en lograr pequeñas victorias antes que el conjunto.

No obstante, aún hay retos que persisten al interior de este proceso. El primero de ellos tiene que ver con el fortalecimiento y expansión que han tenido algunas agrupaciones armadas al interior del territorio en el país. Los ceses bilaterales sacaron a la variable de la Fuerza Pública del conflicto como el grupo con la mayor capacidad de fuego, dejando el camino para que muchos de estos grupos buscaran consolidarse, siendo un buen ejemplo de ello las acciones del ELN en el Catatumbo, las disputas del Clan del Golfo por el Sur de Bolívar y el Choco, o la presencia de disidencias en el Cauca. Esto llevó a que se replanteara la ofensiva militar como un mecanismo de presión efectivo para que las organizaciones se sientan en el interés de hacer parte de las mesas.

Segundo, la situación del Catatumbo reflejó la fragilidad con la que se presentan los ceses y las afectaciones que se pueden generar a nivel territorial a la población. En este punto, tanto la acción como la omisión representan una responsabilidad a los dirigentes del país; en este sentido, la Paz Total debe cuidarse de no caer en una decisión que termine implicando facilitar que este tipo de situaciones se presenten en los territorios.

Tercero, la paz es una construcción compleja que demanda más que las negociaciones con los grupos armados y, si bien este gobierno ha hecho esfuerzos orientados al fortalecimiento de algunas zonas afectadas por el conflicto, se requiere maximizar las garantías a nivel territorial para que el conflicto armado no tenga asidero. Esto implica la atención de demandas insatisfechas, garantía de derechos y libertades, desarrollo rural, cultura enfocada en la paz, entre otros aspectos.

La Paz Total en medio de la expectativa

La Paz Total no va a lograr los objetivos propuestos por la administración. A portas de llegar a su último año, no se tiene una conversación clara que pueda ser la bandera del ejecutivo para mostrar en este periodo. No obstante, se pueden lograr victorias específicas con facciones de las Disidencias de las FARC, Comuneros del Sur y, en caso de adelantarse un marco legal que permita su sometimiento, con las organizaciones urbanas de Medellín, Buenaventura y Quibdó.

El camino es incierto y es importante reflexionar sobre los aprendizajes que deja el proceso de Paz Total, la cual deja altas expectativas creadas en el país. La Paz Total es una apuesta ambiciosa que se reflejaba como una solución completa a la violencia; sin embargo, ha carecido de impactos que permitan darle la visibilidad requerida, así como es una política que se encuentra en contrarreloj, siendo dependiente de la voluntad de los actores armados y de las capacidades de negociación del Estado.

En este punto, las acciones que se logren adelantar en el marco de la Paz Total deberían estar enfocadas en dos puntos: Primero, lograr la desmovilización de sectores de los grupos armados a nivel territorial, las cuales han mostrado su voluntad de negociación, con el fin de avanzar de manera paulatina y mostrar rutas para las grandes organizaciones. Segundo, plantear una ruta que permita que la Paz Total pueda dejar el camino allanado para que la siguiente administración genere avances basados en los logros de la actual, esto se debe especialmente a la posibilidad de llegar a una negociación con el ELN y al sometimiento con el Clan del Golfo.

Farid Camilo Rondón Raigoza, Miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional, investigador, consultor, magister en Estudios Políticos y profesor ocasional.

Foto tomada de: El País